

COMENTARIOS

DIFICULTADES PARA EL DIALOGO

Las airadas discrepancias que han sucedido a la oferta de una tercera ronda de diálogo con el FDR-FMLN, que el presidente Duarte formuló al final del informe anual de labores rendido ante la asamblea legislativa el 1 de junio, han evidenciado nuevamente, a 18 meses de la ruptura unilateral del proceso de diálogo, dispuesta por el gobierno en Ayagualo, los poderosos intereses que subsisten en contra de una solución dialogada al conflicto y las crecientes dificultades objetivas que se alzan para reanudar el proceso.

A ello ha contribuido, en primer lugar, la improvisación y subitaneidad con la que Duarte anunció la propuesta. Apenas semanas antes del anuncio, el mandatario había reiterado que no existía en el país el "espacio político" adecuado para reanudar el diálogo y había advertido que ello era impensable hasta tanto no fuese superado el clima de descontento socio-político generado por el programa de estabilización económica. A tal punto parecía improbable el retorno a la mesa de negociaciones, que el propio arzobispo de San Salvador, mediador en el proceso, había asegurado dos días antes del anuncio, en Panamá, a Guillermo Ungo, Rubén Zamora, Ana Guadalupe Martínez y Salvador Samayoa, que el gobierno no ofrecía posibilidades de reanudar el diálogo en el corto plazo. Discursivamente, la formulación específica de la propuesta constituyó un añadido a la estructura original del informe presidencial, cuya lógica argumental interna,

hasta ese punto, se había desarrollado en una línea de denuncia a la "guerra impuesta" al pueblo salvadoreño por la Unión Soviética, Cuba y Nicaragua, por intermedio del FMLN.

Todo ello hace que, pese a la objetiva necesidad del diálogo, la súbita oferta de Duarte haya resultado sospechosa. El presidente justificó la propuesta amparándose en "el sentimiento y la voluntad del pueblo salvadoreño, que quiere la paz." El pueblo salvadoreño, sin embargo, ha querido la paz desde que se inició el conflicto, y ello no ha obstado para que Duarte se rehusara durante 18 meses a reanudar las pláticas con el FMLN-FDR. Así, pues, aunque parece tratarse de otra de sus ocurrencias, es conveniente analizar la coyuntura objetiva en el marco de la cual Duarte ofrece nuevamente el diálogo para esclarecer los resortes políticos ocultos tras la ocurrencia.

A nivel regional, las motivaciones parecen bastante claras. Después de haber respaldado vehementemente, durante su reciente gira por Perú, Uruguay, Argentina y Brasil, las gestiones de Contadora y haber prometido que El Salvador firmaría el acta el 6 de junio, incluso aunque Nicaragua no lo hiciera, Duarte ha debido inclinar la cerviz, una vez más, ante la voluntad del gobierno de Reagan. Las poco diplomáticas y groseras declaraciones del canciller Castillo Claramount rechazando Contadora dejaron bastante maltrechas las promesas de Duarte a los países

del grupo de apoyo. Duarte requería con urgencia de un sucedáneo político para compensar el feo papel que había hecho con semejante retracción, y encontró ese sucedáneo en la oferta de diálogo. La estructura de la coyuntura revela un isomorfismo con la estructura de la coyuntura de septiembre de 1984 cuando, como ahora, los aliados centroamericanos de Estados Unidos se echaron para atrás, a última hora, de su publicitado apoyo a Contadora, precisamente cuando el gobierno nicaraguense aceptó firmar el acta. En aquella ocasión, forzado a paliar el servilismo del régimen salvadoreño ante las decisiones de la Casa Blanca, Duarte se sintió urgido a lanzar su primera oferta de diálogo en la ONU.

A nivel interno, no puede descartarse en la actual oferta de Duarte un esfuerzo por revertir el profundo deterioro político sufrido tras 2 años de gestión, y mediatizar las crecientes presiones ejercidas por el movimiento popular en favor del diálogo. De hecho, más allá de las intenciones subjetivas de Duarte, el solo anuncio de la propuesta ha catalizado importantes dinamismos sociales de apoyo al diálogo. En esta movilización han confluído no sólo las fuerzas sindicales y gremiales que tradicionalmente han ejercido una constante presión en favor de una solución dialogada al conflicto y han incorporado esta exigencia como una demanda fundamental de sus plataformas reivindicativas, sino también organizaciones laborales de línea claramente gubernamental, como la UNOC. Asumiendo la propuesta del FDR-FMLN de abrir el proceso a la participación de todas las fuerzas sociales, la UNOC ha exigido incluso que en la tercera ronda "debe haber representación de todos los sectores sociales, políticos y laborales del país."

El contenido de la oferta, sin embargo, no es en modo alguno novedoso. Duarte no ha hecho sino reiterar al FDR-FMLN que deponga las armas y se incorpore al "proceso democrático" dentro "del marco de nuestra constitución." No otra cosa fue lo que ofreció en La Palma y Ayagualo. Por lo mismo, tampoco debiera extrañar que los frentes revolucionarios hayan mantenido también el planteamiento que presentaron en Ayagualo, reiterando que no reconocen la legitimidad de Duarte ni tampoco depondrán las armas. Con todo, ello no les impidió responder positivamente a la oferta, designando una delegación integrada por los doctores Guillermo Ungo y Rubén Zamora, presidente y vicepresidente respectivamente, del FDR, y por los comandantes

Joaquín Villalobos y Leonel González, miembros de la comandancia general del FMLN. Asimismo, los frentes propusieron realizar el encuentro el 30 de julio en San Salvador, esto es, dentro de los márgenes cronológicos fijados por el propio Duarte y aprovechando que éste por fin había aceptado realizar el encuentro en territorio nacional, tal como habían propuesto aquéllos en repetidas oportunidades.

Posteriormente, Duarte no sólo ha rehusado la propuesta de realizar la tercera ronda en San Salvador el 30 de julio. También volvió a amenazar con capturar a cualquier delegación revolucionaria que intentase llegar anticipadamente al país para articular un planteamiento auténticamente nacional con los diferentes sectores. Contra la opinión de las mayorías populares y de sus organizaciones más representativas, el gobierno ha rechazado igualmente la participación de todos los sectores del país, aduciendo que él, por su cuenta, está auscultando la voluntad popular y que no hace falta, por tanto, que haya observadores del pueblo en la tercera ronda. Al



mismo tiempo, secundado por monseñor Rivera y su obispo auxiliar, el gobierno se ha afincado en la mecánica de conversaciones privadas previas, a las cuales el FDR-FMLN se ha opuesto siempre, temeroso de que Duarte las manipule para hacer fracasar el proceso y tener una coartada que le permita atribuir a los frentes la responsabilidad del eventual fracaso.

Desde luego, tras ese veleidoso fluir de decisiones del mandatario se esconde algo más que una constitución psicológica inestable. Duarte sabe bien los límites que le imponen Estados Unidos y la Fuerza Armada. Verbalmente, tanto ésta como aquéllos han apoyado la iniciativa, pese a que su inopinada formulación pudiera haberles suscitado cierto malestar. El mismo 1 de junio, al salir de la asamblea legislativa luego de escuchar el informe presidencial, el embajador Edwin Corr manifestó a los periodistas que “nosotros siempre hemos estado a favor del diálogo y creemos en resolver las cosas con palabras y comprensión y no con balas.” El vocero del Departamento de Estado, Charles Redman, calificó la propuesta de “iniciativa positiva” y recordó

que la Casa Blanca siempre ha apoyado “el diálogo que restablecería la paz y fortalecería el sistema democrático de El Salvador.” Sometida, como Duarte, a las directrices norteamericanas, la Fuerza Armada salvadoreña no se ha atrevido a discrepar públicamente del aval concedido por la embajada a la oferta del mandatario. No obstante, el jefe del estado mayor, general Adolfo O. Blandón, advirtió que la institución castrense apoyaría los esfuerzos de diálogo solamente en la medida que “los terroristas propongan cuestiones lógicas y reales,” y manifestó sus reservas sobre la presunta disposición del FDR-FMLN para incorporarse al “proceso democrático”: “no lo harán, porque saben que ni por ese medio, ni alzados en armas, llegarán al poder.”

Los sectores de derecha —el gran capital y sus instrumentos políticos gremiales y partidistas— han esgrimido las excusas grotescas con las que desde siempre han adversado el diálogo. Han puntualizado que “el diálogo no llevará jamás a ninguna solución y sólo favorece a los comunistas,” y han conminado al gobierno a capturar a los delegados del FDR-FMLN cuando





arriben al país "porque son delincuentes y están fuera del marco jurídico." Obviamente, el ataque a la tercera brigada de infantería, con sede en San Miguel, ha sido inmediatamente interpretado como evidencia de la ausencia de una sincera voluntad de diálogo de parte del FMLN. Pero, curiosamente, ni el gobierno, ni la Fuerza Armada, ni la derecha, han insistido, como lo hacían pocas semanas atrás, en la tesis de que el FMLN se abocaba al diálogo presionado por sus presuntos reveses militares en el campo de batalla. A regañadientes, han debido aceptar que la propaganda del COPREFA sobre el presunto aniquilamiento del FMLN era, en realidad, una presunción infundada, y que ningún ejército desmoralizado y en desbandada podría haber infligido un golpe de las proporciones del ataque a San Miguel. El fragor real de la guerra se impuso una vez más a los fuegos fatuos de la propaganda.

En contrapartida, el éxito de San Miguel robusteció la percepción del FMLN sobre su propio poderío militar y lo animó a negociar la mecánica para la tercera ronda desde una posición de fuerza. Puesto que el gobierno tampoco quiso transigir, al intermediario no le quedó más alternativa que salir de gira por Sudamérica a la espera de que en el interin se apaciguen las discrepancias entre las partes.

El FDR-FMLN ya ha dado muestras de su disposición al diálogo y ha flexibilizado su planteamiento a efecto de no despeñar el proceso. La declaración emitida el 10 de junio por el consejo ejecutivo del FDR y la comandancia general del FMLN testimonio esa disposición. El gobierno, en cambio, no encuentra todavía el camino para escapar con un mínimo de decoro de los dinamismos a que lo ha empujado la oferta del 1 de junio. Muy tardíamente se ha percatado el ingeniero Duarte de los frutos de la improvisación y el espontaneísmo irresponsable.

Desde luego, ésta no sería la primera vez que el mandatario se retracta de una decisión que debiera ser definitiva. Ello ha ocurrido en la investigación de la corrupción, en el caso de los secestros, en el proceso de Contadora e incontables veces, en el propio proceso de diálogo interno con el FDR-FMLN. Si los sectores populares no ejercen la presión suficiente para que el gobierno retorne a la mesa de conversaciones, es de esperarse que el presidente Duarte evadirá, una vez más, el cumplimiento de sus promesas de diálogo.

A. A. C.